

Aguascalientes, Ags., a \*\*\*\*\*.

**VISTOS** los autos del expediente \*\*\*\*\*/\*\*\*\* relativo al juicio que en la vía **EJECUTIVA MERCANTIL** promueve \*\*\*\*\* en contra de \*\*\*\*\* y encontrándose en estado de dictar sentencia definitiva, se procede a la misma al tenor de los siguientes:

**CONSIDERANDOS:**

**I.** Establece el artículo 1324 del Código de Comercio: "*Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá á los principios generales de derecho, tomando en consideración las circunstancias del caso.*".

**II.** La suscrita Jueza es competente para conocer del presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 1092 del código de Comercio que señala que: "*Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa y tácitamente.*". En la especie, las partes se sometieron tácitamente a la jurisdicción de este tribunal, la parte actora al entablar su demanda y la parte demandada al no controvertir la competencia, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 1094 del citado ordenamiento.

**III.** La vía EJECUTIVA MERCANTIL se declara procedente, ya que el documento fundatorio es **un** Título de Crédito, de los denominados **pagarés**, que reúne los requisitos previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de acuerdo al artículo 1391 fracción IV del Código de Comercio, trae aparejada ejecución siendo documento suficiente para deducir la acción por la vía privilegiada mercantil.

**IV.** La parte actora \*\*\*\*\* demandó las siguientes prestaciones:

a). El pago de \*\*\*\*\*, como suerte principal.

b). El pago de intereses moratorios generados hasta su total liquidación con base al interés legal correspondiente al nueve por ciento anual o en su caso el que esté vigente actualmente en la Ciudad de Aguascalientes.

c). El pago de gastos y costas que el juicio origine.

Basa sus pretensiones en señalar que en ésta Ciudad de Aguascalientes, el día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la parte demandada suscribió un título de crédito de los denominados pagarés por la

cantidad de \*\*\*\*, a favor de \*\*\*\*, con fecha de vencimiento el dieciséis de marzo de dos mil veinte, que se pactó que en caso de incumplimiento en el pago de la cantidad adeudada se pagaría como interés moratorio el interés legal correspondiente al nueve por ciento anual o en caso el que estuviera vigente en la Ciudad de Aguascalientes, que la acreedora original lo endosó en propiedad a la ahora actora y que pese a las múltiples gestiones extrajudiciales que para su cobro se han realizado, la parte deudora se ha negado a pagar el adeudo por lo que proceden por la vía legal.

Por su parte la demandada \*\*\*\* no dio contestación a la demanda entablada en su contra, no obstante que se le emplazó legalmente, **por lo que conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, la parte actora tiene la carga probatoria para demostrar los hechos constitutivos de su acción.**

V. Procediendo al análisis de la acción cambiaria directa intentada por \*\*\*\*, la suscrita considera que la misma quedó plenamente acreditada, como a continuación se verá:

El artículo 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que: "*La acción cambiaria se ejercita.*

- I. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial;*
- II. En caso de falta de pago o de pago parcial; y,*
- III. Cuando el girado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra o de concurso...".*

Por su parte el artículo 152 del mismo ordenamiento legal antes invocado dispone que: "*Mediante la acción cambiaria el último tenedor de la letra puede reclamar el pago:*

- I. Del importe de la letra;*
- II. De intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento;*
- III. De los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos; y,*
- IV. Del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación...".*

La parte actora ofreció la **DOCUMENTAL PRIVADA** consistente en el pagaré que acompañó a su escrito inicial de demanda, **cuyo origen grafico no fue impugnado por la parte demandada,**

**incluso cuando la demandada fue requerida de pago, el día que se le embargó y emplazó, reconoció la firma y el adeudo,** por lo que conforme al artículo 1296 del Código de Comercio, merece eficacia plena, de ahí que se tiene por acreditado que en Aguascalientes, el día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, \*\*\*\* aceptó un pagaré a favor de \*\*\*\*, por \*\*\*\*, que se cubriría en Aguascalientes el dieciséis de marzo de dos mil veinte, que la parte deudora cubriría el crédito que reconoció haber recibido y los intereses moratorios aplicables que se generen sobre el monto del documento de conformidad con el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre dichas partes, siendo que del contenido del fundatorio no se advierte que se haya establecido un porcentaje de interés moratorio.

De conformidad con los artículos 152 fracción II y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el artículo 362 del Código de Comercio, se absuelve a la parte demandada del pago de intereses moratorios, debido a que la parte actora reclamó su pago afirmando que en el documento base de la acción se pactó como interés moratorio una tasa del interés legal correspondiente al nueve por ciento anual y si bien también indicó que en su caso reclamaba el que estuviera vigente actualmente en esta Ciudad de Aguascalientes; sin embargo, como se señaló al valorar el fundatorio no contiene estipulación de porcentaje que pactaron sobre esos intereses, solo hace referencia a que los pagos del crédito e intereses moratorios se realizarían conforme al contrato de apertura de crédito simple celebrado entre las partes, pero no se exhibió ese acuerdo de voluntades ni se ofreció prueba alguna suficiente para acreditar que las partes estipularon el porcentaje de interés moratorio que se pretende en la demanda.

Sin que se condene a la demandada al pago de intereses al tipo legal, del seis por ciento anual, porque no fue reclamado dicho interés en la demanda, se insiste se sostuvo por la parte actora que habían pactado el interés legal del nueve por ciento anual, luego de condenar a la demandada al pago del interés moratorio que establece el artículo 362 del Código de Comercio como legal, cuando las partes no estipulan algún porcentaje al respecto, se dejaría en estado de indefensión a la parte demandada, ya que no se le dio oportunidad de oponer excepciones y defensas en cuanto al cobro del interés por falta de pacto, se insiste en la demanda se reclamó el porcentaje que la actora sostuvo pactaron las partes

en el documento base de la acción y en ningún momento pidió que se condenara a su contraria al pago del interés legal por falta de pacto en relación a ello, incluso pidió el nueve por ciento anual, siendo que en materia mercantil el porcentaje de interés legal es el **seis por ciento anual**, así se establece en el numeral invocado anteriormente, entonces no existió litis en relación al cobro de intereses moratorios al tipo legal por falta de estipulación en el título de crédito base de la acción sobre el porcentaje, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 1327 del Código de Comercio.

Con apoyo además en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 680, registro: 161 053, numero de Tesis: 1a./J. 22/2011, con el siguiente rubro y texto:

**“INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO NO FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y RESPECTO DE LOS CONVENCIONALES SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO.**

*Quando en un juicio ejecutivo mercantil se demanda el pago de un título de crédito y los intereses moratorios pactados, y el demandado acredita la excepción de alteración de documento, resulta incorrecta la condena al pago de interés al tipo legal por no haberlo solicitado la actora en su demanda, ya que los intereses convencionales y los legales son prestaciones independientes que deben precisarse en esos términos en dicho escrito, pues sólo así el demandado tendrá claro lo pretendido, y podrá allanarse a ello o controvertirlo interponiendo las excepciones que estime pertinentes. En ese sentido, la litis cerrada en el juicio ejecutivo mercantil no permite que el juzgador se sustituya en la obligación procesal del actor al variar las prestaciones demandadas por no prosperar lo inicialmente pretendido, dado que se trastocarían la congruencia de la sentencia establecida en el artículo 1327 del Código de Comercio y la garantía de defensa contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el demandado no tendría oportunidad de ser oído y vencido en el juicio respecto de dicha prestación.”.*

Cabe señalar que del documento se desprende que la beneficiaria original **lo endosó en propiedad a favor de \*\*\*\***, por lo que

esta última adquirió los derechos incorporados en el citado título de crédito acorde a los artículos 5 y 34 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Así mismo, la parte actora ofreció las pruebas **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA** que en su conjunto le son favorables conforme a los artículos 1294, 1305 y 1306 del Código de Comercio para tener por demostrada la existencia del crédito a su favor ya que la parte demandada no opuso excepciones buscando destruir la acción intentada, aunado a que del mismo documento surge la presunción en el sentido de que al estar en poder de la parte actora es porque su importe no ha sido cubierto en su totalidad ya que el pago de un título de crédito es contra su entrega y en el caso concreto la parte actora tiene en su poder el accionario pues lo exhibió con su demanda, presunción legal que no fue desvirtuada en autos, por lo que tiene eficacia plena de conformidad en lo dispuesto en los artículos 17 y 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Ahora bien, en la diligencia del **dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno** la demandada hizo un abono de \*\*\*\* que se recibieron como abono conforme a la ley, pero como no se condenará al pago de intereses moratorios, se aplica a capital, con fundamento en el artículo 364, párrafo segundo del Código de Comercio.

Con motivo de lo anterior, la suerte principal de \*\*\*\*, se redujo a \*\*\*\*.

De manera que, al haberse fundado la acción cambiaria directa en título de crédito que es una prueba preconstituida de la acción, entonces, a la parte demandada le correspondía demostrar el pago o cumplimiento, lo anterior con apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro: 192,075, Materia(s): Civil, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, Tesis: VI.2o.C. J/182, Página: 902, con el siguiente rubro y texto:

**"TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.** *De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, luego, constituyen una*

*prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y por ello si la demandada opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a él y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamenta su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil invocada, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa codificación, es la demandada que emitió la negativa, el obligado a probar, ya que este último precepto establece que también está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su coligante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que la parte demandada acredite sus excepciones o defensas, además, para que el actor destruya las excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario.”.*

**VI.** Se declara que la actora \*\*\*\* si acreditó los hechos constitutivos de su acción cambiaria directa ejercitada en contra de la demandada \*\*\*\*, quien no contestó la demanda.

Con fundamento en el artículo 152 fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se condena a la demandada a pagar a la actora la cantidad de \*\*\*\*, por concepto de **saldo de suerte principal**.

De conformidad con los artículos 152 fracción II y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el artículo 362 del Código de Comercio, se absuelve a la parte demandada del pago de **intereses moratorios convencionales reclamados**.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1084 del Código de Comercio y en relación al pago de **gastos y costas**, se debe tomar en consideración que en el presente caso la parte actora intentó juicio Ejecutivo Mercantil por el pago de diversas prestaciones, respecto de las cuales sólo obtuvo una condena parcial en contra de la parte demandada, debido a que **no se condenó al pago del interés moratorio reclamado, a razón del porcentaje pactado en el documento base de la acción, toda vez**

que conforme al contenido del mismo se concluyó que no estipularon las partes porcentaje a pagar de moratorios, entonces debe considerarse, si las partes actuaron con temeridad o mala fe.

Por lo que se refiere a la parte demandada, no contestó la demanda, no opuso excepciones, incidentes o recursos que resultaran inconducentes o faltando a la verdad, con el propósito de retardar el procedimiento, ni buscó alguna pretensión injusta a sabiendas de que lo era, entonces se concluye que no actuó con temeridad o mala fe y se le absuelve del pago de gastos y costas.

En relación a la parte actora, si bien no obtuvo sentencia favorable a sus intereses ya que no se condenó a su contraria al pago del porcentaje de intereses reclamados, sin embargo, esto se resolvió en forma oficiosa, además como la parte demandada no contestó la demanda y no se advierte que este juicio le haya ocasionado algún gasto, entonces tampoco se condena a la parte demandante al pago de gastos y costas.

Robustece lo resuelto con anterioridad, la jurisprudencia con número de registro No. 913117, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo IV, Página: 142, Tesis: 175, que es del rubro y texto siguiente:

**"COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.** El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas "el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable..." en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas."

Así como la jurisprudencia 10/2013, correspondiente a la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha nueve de enero de dos mil trece, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 2003008, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Tesis 1a./J. 10/2013 (10a.), Página 575, que es del rubro y texto siguiente:

***"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.*** El artículo 1084, del Código de Comercio prevé que la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el caso concreto se configure alguno de los dos para que sea procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción V, del artículo 1084, del Código de Comercio, -que refiere que siempre será condenado el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe con que haya actuado cualquiera de las partes."



Además, se apoya lo resuelto anteriormente, en la tesis de jurisprudencia emitida por contradicción de tesis por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro: 2015691, Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 73/2017 (10a.), Página: 283, con el siguiente rubro y texto:

**"COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO.** Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia favorable" se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los

*montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente.”.*

Así como en lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en los Amparos Directos Civiles número 1387/2015 y 1709/2017 en asuntos en el que la demandada no contestó la demanda ni había comparecido a juicio, se estimó que no debería condenársele al pago de gastos y costas por no existir temeridad o mala fe de dicha parte, sentencias que aparecen dictadas en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal accediendo a la Dirección General de Estadística Judicial.

Sin que se ordene en este momento hacer trance y remate de bienes embargados, como lo señala el artículo 1408 del Código de Comercio, en la medida que se embargó el excedente del salario mínimo en un porcentaje del treinta por ciento, como se observa de la diligencia de embargo y emplazamiento, por lo que de no hacer la demandada el pago voluntario de lo adeudado, considerando la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hará el pago con las cantidades que en su momento sean retenidas del salario.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 1321, 1322, 1324, 1325, 1327 1329 y 1330 del Código de Comercio, así como en los artículos 170, 171, 172, 173, 174 y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es de resolverse y se resuelve:

**PRIMERO.** La suscrita Jueza es competente para conocer del presente juicio.

**SEGUNDO.** Se declara procedente la vía EJECUTIVA MERCANTIL.

**TERCERO.** La actora \*\*\*\*, si acreditó los hechos constitutivos de su acción cambiaria directa ejercitada en contra de la demandada \*\*\*\*, quien no contestó la demanda.

**CUARTO.** Se condena a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de \*\*\*\*, por concepto de **saldo de suerte principal**.

**QUINTO.** Se absuelve a la demandada del pago de **intereses moratorios convencionales reclamados**.

**SEXTO.** No se hace especial condena en gastos y costas.

**SÉPTIMO.** No se ordena en este momento hacer trance y remate de bienes embargados, toda vez que se embargó el excedente del salario mínimo en un porcentaje del treinta por ciento, por lo que de no hacer la demandada el pago voluntario de lo adeudado, considerando la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hará el pago con las cantidades retenidas del salario.

**OCTAVO.** En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veinte, se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

**NOVENO.** Notifíquese y cúmplase.

Así, definitivamente lo sentenció y firma la **LICENCIADA SANDRA LUZ VELASCO MARÍN**, Jueza Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de esta Capital, por ante su Secretaria de Acuerdos que da fe y autoriza, **LICENCIADA REBECA JANETH GUZMÁN SILVA**.

La Secretaria de Acuerdos antes mencionada da fe que la resolución que antecede se publicó en listas de acuerdos que se fijan en estrados del juzgado, conforme al artículo 1068 fracción III del Código de Comercio, con fecha \*\*\*\*. **Conste.**

La **LICENCIADA REBECA JANETH GUZMÁN SILVA** Secretaria de Acuerdos adscrita al Órgano Jurisdiccional, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia ó resolución \*\*\*\*/\*\*\*\* dictada en fecha \*\*\*\*\* por la Juez Tercero Mercantil en el Estado, consta de **12** fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones, se suprimió: **el número de expediente, el nombre de las partes, de los representantes legales, de la beneficiaria original, las fechas de dictado y publicación de la resolución, así como el monto a pagar como suerte principal**, información que se considera legalmente como **confidencial** por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.